

6955

EXPDTE. No.

Forma A, No. 17 B

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

2a. OFICIALIA MAYOR

Año de iniciación 1934

Núm. 6955

Toca al Amparo DIRECTO.

Promovido por Macedo Miguel S. Jr. y otro.

Contra actos de 3a. Sala del Trib. Sup. de Just. del D.F.

Ante el Juez de Distrito de D.F.

Fecha de ingreso al archivo



EXPDTE. No.

6955



México, Distrito Federal, a veintidós de marzo de mil novecientos treinta y nueve. ACUERDO DE LA --
TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA--
CION.

VISTOS:- los autos del juicio de amparo pro--
movido directamente ante esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por Miguel S. Macedo Jr. y Dolores Boubée
viuda de Macedo, como causahabientes de la sucesión tes--
tamentaria del licenciado Miguel S. Macedo, contra ac--
tos del señor Licenciado Roque Estrada, en su carácter
de Arbitro necesario designado por la Tercera Sala del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de
la propia Tercera Sala, y del Juez Octavo de lo Civil -
de esta Capital, por violación de los artículos 14 y 16
constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Miguel S. Macedo Jr. y Dolores ---
Boubée viuda de Macedo, como causahabientes de la suce--
sión testamentaria del licenciado Miguel S. Macedo, re--
claman la sentencia de segunda instancia pronunciada el
veintidós de noviembre de mil novecientos treinta y ---
cuatro, por el licenciado Roque Estrada en su carácter
de Arbitro necesario, designado por la Tercera Sala del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en
el interdicto de obra nueva intentado por el señor Fe--
derito Ludert; sentencia por virtud de la cual, se mo--
difica la pronunciada por el Juez Octavo de lo Civil de
esta Capital, el diecinueve de diciembre de mil nove---
cientos treinta; se declara que el actor probó en parte
su acción, y en consecuencia procedente en parte el in--
terdicto de obra nueva; se condena al licenciado Miguel

S. Macedo Jr. a rebajar los postes o pilares del primer piso de la casa número treinta y cinco de la Avenida Uruguay de esta Capital, que se empotran en el muro que la divide de la casa número treinta y siete de la misma Avenida, hasta dejar dicho muro con su primitivo y natural espesor; a construir desde sus cimientos y con atagüa un muro paralelo con el objeto de que sobre él únicamente se apoyen los muros transversales de la referida casa número treinta y cinco; a que desaparezcan los voladizos exteriores de la casa treinta y cinco que dan a la treinta y siete de dicha Avenida; y especifica la propia sentencia que dichos trabajos deberán ser ejecutados con los requisitos que apruebe la Dirección de Servicios Urbanos y Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, y que deberán quedar concluidos dentro de sesenta días; deja a salvo los derechos de las partes sobre propiedad y posesión definitiva, y no hace especial condenación en costas. Reclaman asimismo la ejecución de dicha sentencia que atribuyen al Juez Octavo de lo Civil de esta Capital.

SEGUNDO.- De las diversas constancias de autos aparece lo siguiente: que don Federico Ludert promovió por escrito de cuatro de septiembre de mil novecientos treinta, ante el Juez Octavo de lo Civil de esta Capital, contra la sucesión de don Miguel S. Macedo, un interdicto de obra nueva; que en dicho escrito manifestó ser propietario y poseer con tal calidad la casa número treinta y siete de la Avenida Uruguay de esta Capital, la que había reedificado por completo pocos años antes, construyendo un edificio de cuatro pisos --



- 2 -

para despachos; que dicha casa perteneció con anterioridad a su esposa, Isabel Vivanco de Ludert, a cuyo favor reconoció el Doctor Guillermo Parra, propietario de la casa contigua, número treinta y cinco de la misma calle, el dominio absoluto del muro divisorio, en escritura pública de primero de diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, ante el Notario José Ráz Guzmán; que la testamentaria de don Miguel S. Maceo, a quien pertenecía el predio número treinta y cinco de las calles de Uruguay en la época en que se intentó la acción interdiccial, había comenzado a construir en dicho predio un edificio de varios pisos sin observar la técnica de la cimentación, para evitar los perjuicios producidos por hundimientos en el suelo de México; que al ejecutar la obra, encontró la testamentaria citada, los pilares que le van a sostener en parte de la pared que le pertenece en absoluta propiedad al destacar el primer piso y en los superiores ha invadido el dominio que le corresponde de la superficie comprendida entre dicho muro y las paredes que está levantando; que tales obras en ejecución han ocasionado, por el agua empleada y por su peso, humedad en el muro; filtraciones en otros lugares, desprendimiento de varios aplanados, cuarteaduras en el muro susodicho y en los transversales, y desniveles de las puertas de comunicación de la casa treinta y siete; y concluyó solicitando "en definitiva declarar que ha procedido el interdicto que promuevo, ordenando sea demolida la obra de cuyos perjuicios me quejó." La demandada negó la reclamación instaurada en su contra en todas sus partes, y particularmente en lo ---



que se refiere a los perjuicios que se alegan derivados de vicios o defectos en la construcción, y en cuanto -- a aquellos que se hacen derivar de pretendidas ocupaciones en el suelo, muros y espacios, que se dicen pertenecer a la actora, afirma que pertenecen a la demandada -- en cuya posesión ha estado por más de veinte años pacífica y continuamente. En la dilación probatoria de primera instancia la actora usó de los siguientes medios -- de prueba: la testimonial consistente en las declaraciones de los señores Alberto Amador y Alberto Vázquez, y en la del señor licenciado Fernando Noriega; la documental, consistente en el testimonio de escritura pública de adjudicación de bienes de la sucesión de doña Isabel Vivanco de Ludert; en una certificación de la Oficina -- del Catastro; en un testimonio de la escritura pública de primero de diciembre de mil ochocientos noventa y -- nueve, otorgada entre la señora Vivanco de Ludert y don Guillermo Parra; en las actuaciones del interdicto; y -- la inspección judicial de la obra nueva y muro invadido, con asistencia de los peritos designados por las -- partes en la prueba pericial ofrecida por la demandada. La sucesión de don Miguel S. Macedo rindió como pruebas la testimonial de los señores Fernando Villarreal, Carlos Ayala y Antonio Ruiz Escobedo; la pericial; la instrumental, consistente, en las licencias mil, y tres -- mil seiscientos sesenta y cinco expedidas por la Dirección General de Obras Públicas respectivamente el veintiseis de junio y seis de septiembre de mil novecientos treinta; las actuaciones del interdicto; la confesional

- 3 -



del señor Federico Ludert; y la instrumental consistente en el informe que rindió la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal; y por último, la inspección judicial que practicó el Juzgado. Con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos treinta se pronunció sentencia en primera instancia declarándose improcedente el interdicto de obra nueva en virtud de no haber probado el actor su acción; se dejaron a salvo los derechos de las partes sobre propiedad y posesión definitivas, y no se hizo especial condenación en costas. El señor Federico Ludert interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, y ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a quien correspondió el conocimiento en la alzada, promovió artículo sobre dilación probatoria habiendo sido concedido por un término de cinco días que corrió del veintiocho de agosto al dos de septiembre de mil novecientos treinta y uno. En tiempo ofreció la propia parte actora la documental e instrumental consistente en los documentos que ofreció en primera instancia, y en el informe de la Dirección de Obras Públicas sobre los puntos que menciona en su escrito relativo; la inspección judicial para acreditar los desperfectos causados a la casa número treinta y siete; y la pericial conforme al cuestionario que exhibió; también rindió la documental consistente en una acta suscrita por diversas personas el veintinueve de octubre de mil novecientos treinta y la testimonial de los señores Eduardo Manco, Alberto Batiz, Samuel Calderón y José L. Sanmartín.



S

Durante dicha dilación probatoria únicamente se recibió la documental, instrumental y testimonial ofrecidas; y habiéndose solicitado término supletorio de prueba, se concedió éste por cinco días, el cual corrió del dos al siete de enero de mil novecientos treinta y dos, para que dentro de él se practicara la inspección judicial y la pericial ofrecidas por la parte actora, y como durante este término supletorio únicamente pudo practicarse la inspección judicial, el señor Federico Ludert solicitó se prorrogara dicho término supletorio de prueba por cinco días más, durante el cual, una vez concedida la prórroga, pudo practicarse y rendirse la pericial pendiente. Por acuerdo de veintiseis de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro se designó Arbitro necesario para la resolución de este asunto, en segunda instancia, al Licenciado Roque Estrada, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9/o. transitorio del Código de Procedimientos Civiles actual, habiéndose apersonado previamente a los autos la señora Dolores Boubée viuda de Macedo y don Miguel S. Macedo Jr., como únicos causahabientes de la testamentaria demandada, según testimonio de la escritura pública de adjudicación que exhibieron del que aparece que el "Edificio Uruguay" número treinta y cinco de la Avenida Uruguay, fué adjudicado a don Miguel S. Macedo Jr. El Juez Arbitro una vez que -- hizo saber a las partes la radicación de los autos, decretó para mejor proveer y por estar ordenado por la Sala, que se recabase de la Dirección de Obras Públicas del Departamento Central el informe solicitado con anterioridad; y verificada la vista en este asunto, pro--



- 4 -

nunció la sentencia reclamada, el veintidós de noviem--
bre de mil novecientos treinta y cuatro, en los térmi--
nos precisados en el primer resultando de este fallo. -
En su demanda de amparo expresaron don Miguel S. Macedo
Jr. y la señora Dolores Boubée viuda de Macedo, como --
causahabientes de la sucesión demandada, los conceptos
de violación que estimaron pertinentes de los que se --
hará referencia en la parte considerativa de este fallo;
y citaron como garantías violadas las relativas a los -
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

TERCERO.- Aceptada la demanda por acuerdo de
la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de ---
ocho de febrero de mil novecientos treinta y cinco, fué
emplazada la parte tercero perjudicada, habiendo enviado
la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del -
Distrito Federal, las actuaciones de primera y segunda
instancia del interdicto de obra nueva en el que se pro
nunció la sentencia reclamada; y pasados los autos al -
Ministerio Público Federal, el señor Agente designado -
para intervenir en este asunto formuló su pedimento en
el sentido de que se conceda la protección federal a --
los quejosos; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La existencia de la resolución que
motiva el presente amparo ha quedado plenamente accredi--
tada para los efectos del mismo, con la sentencia ori--
ginal que obra en las actuaciones del toca relativo que
remitió a esta Suprema Corte de Justicia, la Tercera --
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-

deral.

SEGUNDO.- La sentencia reclamada substancialmente se funda en las siguientes consideraciones: dice el Juez Árbitro que el inferior vacila en concederle validez legal a la prueba pericial rendida en primera instancia por aparecer que los dictámenes periciales fueron exhibidos fuera del término de prueba; pero que esta vacilación carece de fundamento porque la validez de la prueba se aclara con la circunstancia de que el Juez concedió dentro de sus facultades el término de siete días hábiles a los peritos de las partes para rendir sus dictámenes, término dentro del cual lo rindieron, y el tercero rindió el suyo cuando apareció la discordia y por orden expresa judicial; que en estas condiciones resulta preciso examinar las cuestiones propuestas, haciéndose el análisis de la primera instancia bajo el Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, y el de la segunda, en lo conducente, conforme al Código Procesal de mil novecientos treinta y dos, como lo ordena el artículo 3/o. transitorio de este último Cuerpo de Leyes; que el derecho para ejercer la acción interdiccial de obra nueva quedó demostrado en primera instancia con el testimonio de escritura pública de veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta en el que consta la adjudicación al señor Ludert de la casa número treinta y siete de la Avenida Uruguay, en la sucesión de su esposa la señora Vivanco de Ludert, porque la fracción I del artículo 1195 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro reconoce ese derecho a quien se cree - 6



- 5 -

perjudicado en sus propiedades; que la posesión que se desprende de la concordancia de los artículos 1132, --- 1134, 1138 y 1141 del mismo Código la demostró el actor por medio de la información testimonial previa, sin citación contraria, de los Ingenieros Olvera y Liancebo; - con la rendida en el cuaderno de sus pruebas al contestar los ingenieros Amador y Batiz las preguntas IV, V, - VII y VIII del interrogatorio directo y la VI del de -- repreguntas; que ambas pruebas tienen fuerza probatoria plena, la primera por ministerio de la ley y la segunda porque así se le concede el árbitro por las condiciones, circunstancias y calidad profesional de los testigos, de acuerdo con los artículos 551, 552, 562 y 563 del Código citado; que esta prueba no está desvirtuada por la - testimonial, ni por la de inspección judicial, pericial o confesional rendidas por la demandada; que la existencia y construcción de la obra nueva y el derribo previo de la antigua durante el año de mil novecientos treinta por la testamentaria del señor Macedo, aparte de no haber sido expresamente objetadas, se demostró en primera instancia con la fe del Actuario al notificar la suspensión provisional de la obra, y con las testimoniales -- antes citadas, particularmente en lo que se refiere a - las declaraciones de los Ingenieros Amador y Batiz, al contestar las preguntas XX y XXI del interrogatorio directo, y las repreguntas correspondientes, así como con la inspección judicial practicada, conforme al artículo 559 del Código Procesal citado y las disposiciones legales ya enunciadas sobre pruebas testimoniales; que -- también se demostró en primera instancia la existencia

S

E

N

T

E

C

I

P

de la casa número treinta y siete de la Avenida Uruguay y sus desperfectos, tales como el desnivel de la puerta de entrada, cuarteaduras en la pared occidental y en -- algunas perpendiculares a ella de varios pisos, desniveles de algunas puertas de intercomunicación y huellas en otras de haber sido rebajadas y manchas al parecer de humedad; pero es necesario saber si esos desperfectos se produjeron durante o con posterioridad al derribo del viejo edificio o la construcción del nuevo y si en caso afirmativo lo fué como efecto de tales actos; -- que los testigos Ingenieros Amador y Batis al contestar las preguntas XXII y XXV y los peritos del actor y tercero en discordia afirman que son recientes los desperfectos de la casa número treinta y siete, y la demandada afirma que lo son algunos y no puede alegar lo sobre otros; en consecuencia, dice el árbitro, dada la calidad de los testigos y peritos, la naturaleza de los hechos a prueba y las circunstancias de la misma, -- está demostrado que eran recientes esos desperfectos -- y que se produjeron durante la construcción de la obra nueva, de acuerdo con los artículos 561, 562 y 563 del Código Procesal precitado; que en la información previa asientan los testigos que "por", "con motivo" y por el "peso" de la construcción de la casa número treinta y cinco se produjeron en la treinta y siete los referidos desperfectos; la contestación del perito del actor a -- las preguntas VII, X y XIV de su cuestionario corrobora esos testimonios, y las contestaciones de los peritos -- de la demandada y tercero en discordia, son vagas; que los tres peritos están conformes en que se hubiera evi-

- 6 -



tado la humedad cubriendo la pared divisoria con cartón impermeable y que la existencia de esa humedad en la -- parte interior de la casa treinta y siete, revela que -- no se empleó ese cartón, y el de la propia demanda agre ga que los señores Kunhardt y Capilla (constructores) -- le aseguraron "que a partir del segundo piso usaron el cartón impermeable luego que tuvieron conocimiento de -- que pasaba la humedad a la casa treinta y siete"; es de cir, cuando ya esta casa estaba sufriendo el daño; que si este descuido entraña responsabilidad por sí sólo, -- esta responsabilidad se hace más clara al notar que se contravino lo dispuesto en el artículo 296 del Reglamen to de Construcciones, que ordena el empleo de materias impermeables; que entre esta prueba y la plena del tiem po de los desperfectos existe concordancia y enlace de antece-- ante y consecuente, y, por lo mismo, constituyen una presunción de fuerza probatoria plena, de ser el de -- cumbre y la construcción de la casa número treinta y -- cinco causa de los desperfectos ocasionados en la núme ro treinta y siete, de acuerdo con los artículos 561 -- del Código Procesal ya invocado; que con respecto a nue vas cuarteaduras en la casa número treinta y siete con motivo de la falta de ataguías al cimentarse la número treinta y cinco, sobre cuya falta no hay contradicción en autos, asientan los peritos del actor y tercero res pectivamente, que es probable el pronunciamiento de las grietas existentes, la apertura de otras y que se noten trastornos difíciles de predecir, y que los asentamien tos forzosamente tienen que asentar los cimientos colin dantes cuando no hay independancia entre sus respecti vos terrenos hasta cierta profundidad, y el perito de --



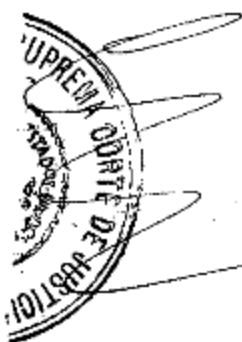
S

la demandada se limita a manifestar que cree que no se producirán nuevas cuarteaduras: de allí que sea lógica la posibilidad de nuevos desperfectos; que la posesión íntegra del muro divisorio (occidental de la casa treinta y siete) por parte del señor Ludert quedó demostrada en primera instancia con los siguientes elementos de prueba: respuestas de los testigos a las preguntas IX a XII y repreguntas (cuaderno de pruebas del actor), al estar contestes en que en la posesión está incluido el muro, en que sobre él descansaban exclusivamente piso y techo de la casa del señor Ludert antes de ser reconstruida, en que lo fué por el año de mil novecientos veintiuno, y en que al hacer esta reconstrucción aprovechó el muro elevándolo hasta la actual altura: en el testimonio de escritura pública en la que el Doctor Guillermo Parra, dueño entonces de la hoy casa número treinta y cinco de la Avenida Uruguay, reconoció en favor de la señora Isabel Vivanco de Ludert, dueña entonces de la hoy casa número treinta y siete de la misma Avenida, el dominio exclusivo del muro limítrofe, se obligó aquél a recortar el excedente de una cornisa de la primera casa para dejar perceptible e indiscutible el dominio de la segunda y permitió la señora Ludert al Doctor Parra levantar sobre dicho muro una pared; con los documentos consistentes en la certificación del acta número 610 de diez de diciembre de mil novecientos nueve, de la Oficina del Catastro, y copia fotostática de un escrito dirigido al Director de esa Oficina, en siete de diciembre del mismo año, por los señores Macedo, autor de la sucesión demandada, y Ludert, y con el



- 7 -

testimonio de la escritura de adjudicación de bienes -- de la señora Ludert; que esta demostración posesoria -- es correcta porque es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, y su propietario puede gozar y disponer de la misma -artículos 2/o. transitorio, 790 y 830 del Código Civil vigente y entraña la posesión de menores límites que la que se desprende de la concordancia de los artículos 1132, 1134, 1138 y --- 1141 del Código de Procedimientos Civiles, sin que esté desvirtuada por prueba alguna de la demandada, ni aún -- por la testimonial en la que los tres testigos incurren en contradicciones al contestar repreguntas de importancia, pues uno dice que no recuerda en qué parte los pisos y techos de la casa treinta y cinco descansaban en el muro occidental de la casa treinta y siete, otro, -- que en la primera pieza de la fachada, en el primer piso, y los demás no lo recuerda, y el otro que en la -- parte del fondo de la casa; uno dice que no se fijó en dónde descansaba la azotea de la casa treinta y cinco, -- otro que no en todas partes, y el último que no lo sabe; uno que no se fijó en si la azotea de la casa treinta y cinco descansaba en el muro de la treinta y siete y los otros dos que se atienen a lo contestado, y, los tres que no les corresponde expresar en qué se basaron para decir que nunca se discutió a la casa treinta y -- cinco el uso que hacía del muro divisorio; en cambio, -- a la sexta repregunta de las relativas a la IV del interrogatorio directo, dos testigos convienen en que el muro divisorio está construido en terreno de la casa -- treinta y siete y el último dice no saberlo con exactitud; que es inconducente el deslinde practicado por el perito tercero, porque no se trata de tal interdicto --

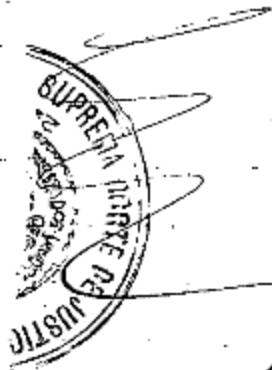


desde el momento que no hay confusión de límites entre las casas expresadas, y porque el Doctor Guillermo Parrera y la señora Vivanco de Ludert contrataron sobre una cosa localizada, concreta y bien conocida de ambos, como lo fué el muro divisorio; que por lo tanto, quedó comprobada plenamente la posesión íntegra del muro divisorio por parte del señor Ludert y debe ser reparada la lesión del derecho; que el empotramiento de postes a diversas profundidades del muro occidental de la casa número treinta y siete en el primer piso de la obra nueva quedó demostrado en primera instancia con el enlace de los siguientes elementos de la prueba: respuestas de los testigos a la pregunta X del interrogatorio de la información previa; respuestas de los testigos del actor a las preguntas XXVII y XVIII, y respuestas de los tres peritos (cuaderno de prueba de la demanda) a la pregunta III del cuestionario indirecto del actor; que en cuanto al Reglamento de Construcciones aprobado en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de México, invocado por las partes, es de considerarse que como reglamento no puede derogar ley alguna y como conjunto de disposiciones de Administración Comunal sólo obliga a quienes expresamente se refiere; que en todo lo relativo a construcciones no llama a los poseedores o propietarios de predios contiguos para que pueda alegarse su consentimiento y deja a salvo los derechos de tercero en su artículo 6/o., no obstante la intervención de la Dirección de Obras Públicas, desde el proyecto de construcción de un edificio hasta su terminación; --

- 8 -



que consecuentemente, su cumplimiento no exonera de responsabilidad civil hacia terceros, ni por su sola inobservancia se contrae esa responsabilidad; que en la primera instancia comprobó la testamentaria demandada haber cumplido la Compañía Constructora, en lo que se refiere a cálculos, planos, sujeción de la construcción a ellos, y presiones sobre el suelo; que al resolver la pregunta XIV del cuestionario del actor el perito de éste y el tercero en discordia, están conformes en que el empotramiento de aquellos pilares o postes ha influido en formación de las empujaduras, y el de la demandada sólo responde que "cree que no"; de allí, que el árbitro se acoja a la afirmativa por tratarse de un punto esencialmente técnico, y en ese caso, el efecto de la acción de empotrar se agrega el de la acción de invadir la propiedad del actor, porque esta invasión constituye otro de los motivos del perjuicio invocados en la demanda, de acuerdo con la fracción I del artículo 1195 del Código de Procedimientos Civiles. Respecto a las pruebas admitidas en segunda instancia, afirma la sentencia del Juez Arbitro, que fueron la documental e instrumental rendidas en la primera ya examinadas, las que acreditan la posesión de la casa treinta y siete y del muro divisorio en favor del señor Ludert; que en cuanto a la testimonial de los señores Eduardo Mancebo, Alberto Batiz, Samuel Calderón y José L. San Martín que se rindió en la alzada, versó sobre los hechos contenidos en una acta también admitida como prueba en la segunda instancia, de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos treinta, firmada por los mismos testigos y el señor Maxi



mino Alcalá Jr.; que los datos que arroja el acta mencionada son: el empotramiento de cinco postes a diversas profundidades del muro divisorio, con invasión y perjuicio de la casa número treinta y siete de Uruguay; la invasión de la misma casa por las trabes y apoyos de los pisos superiores de la treinta y cinco por estar enclavadas dichas trabes dentro del muro divisorio y sobre ellos apoyarse los demás pisos; producción de las cuarteaduras actuales y amenaza de futuras por el exceso de carga; y no existir esas cuarteaduras de la casa treinta y siete antes de la construcción de la treinta y cinco, y constarles lo anterior por haber practicado una inspección ocular en la fecha del acta; que los cuatro testigos ya mencionados al deponer conforme al interrogatorio aparezcan contestes en haber firmado la referida acta, en conocer los hechos contenidos en ella, en constarles de vista, en conocer la casa treinta y siete de la Avenida Uruguay, en constarles de vista la posesión de ella por el señor Ludert, en haberle visto en posesión de la pared que separa dicha casa de la número treinta y cinco de la misma Avenida, en constarles la posesión del propio Ludert del terreno en que está construida la pared, en haber presenciado las obras de construcción de la casa número treinta y cinco, en haber visto que esta construcción invadía aquella pared, en constarles que tal invasión es la que aparece en el plano que se les mostró, en haber visto los perjuicios causados por dicha construcción en la casa número treinta y siete, en haber visto que los mismos perjuicios son los que se expresan en aquella acta, en haber visto que los refe--



- 9 -

ridos desperfectos han seguido aumentando, en constar--
 les que la invasión de la obra nueva en la pared de la
 treinta y siete la cubrieron ultimamente hasta no verse
 a la simple vista, y en constarles lo declarado de cien-
 cia cierta por haber visto y presenciado los hechos so-
 bre que deponen; que aunque algunos de estos hechos fue-
 ron objeto de prueba testimonial en primera instancia y
 los exceptuaba de admisión en la segunda el artículo 668
 del Código de Procedimientos Civiles, su admisión no es-
 tá sancionada mas que con la responsabilidad a que se -
 refiere el artículo 3/o del mismo Código; que la unifor-
 midad de los testimonios, las condiciones generales de
 los testigos, la especial de ser dos de ellos (Mancebo
 y Batiz) profesionales en la materia sobre que deponen
 y la circunstancia de haber practicado conjuntamente los
 cuatro una inspección ocular, producen en el ánimo del
 Juez Arbitro pleno valor probatorio, el cual les conce-
 de conforme a la segunda parte del artículo 419 del Có-
 digo de Procedimientos Civiles vigente, aplicable por -
 disposición del artículo 3/o. transitorio del mismo ---
 Código; que en el último día del término supletorio de
 prueba se practicó por la Sala la inspección judicial -
 ofrecida oportunamente por la actora, prueba que es con-
 firmativa de la de primera instancia sobre cuarteaduras
 de muros y desniveles de puertas y en la que consta, --
 además, que la distancia "entre las cejas del pretil --
 de la casa treinta y siete y la pared oriente de la ---
 treinta y cinco es de sesenta y cuatro centímetros de -
 lado de la fachada y de cuarenta y cuatro en la parte -



S

posterior en que ya no hay muros contiguos y que corresponde a la casa número treinta y siete, siendo de notar que la ceja que se ha tomado como punto de referencia está volada hacia el lado oriente de la casa número --- treinta y siete; en concepto del sentenciador esta --- prueba tiene fuerza probatoria plena en lo relativo a -- la simple existencia de lo inspeccionado conforme al -- artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles vigente; que habiendo prorrogado la Tercera Sala el término supletorio de prueba por cinco días más para el efecto de que dentro de él pudiera recibirse la pericial ofrecida oportunamente por la parte actora, prueba única -- que estaba pendiente de desahogarse, ésta se practicó -- dentro de la citada prórroga del término supletorio de prueba: los tres peritos (Mancebo, Alcérreca y Donbacher) convienen en que el muro divisorio es de la propiedad -- del señor Ludert y en que no se construyó atagüía para -- independer las casas número treinta y cinco y treinta -- y siete de la Avenida Uruguay; que aunque el hecho de -- la propiedad no es propio de su cometido sí constituye un dato corroborativo de lo ya probado desde la primera instancia; que la falta de atagüía sí es un dato técnico importante por su eficacia para evitar los daños a -- los predios contiguos, aunque en el presente caso no lo exija el Reglamento de Construcciones, (artículo 278) -- porque la altura de la obra nueva no alcanza el doble -- de la contigua; que el perito del actor, Ingeniero Mancebo, dictamina como cierto lo siguiente, con motivo de la construcción de la obra nueva: invasiones en la pared de la casa número treinta y siete por el empotramiento de columnas de cemento armado y trabes apoya--

- 10 -



das en ellas, y producción de cuarteaduras en esa pared divisoria y en las perpendiculares al muro de la casa treinta y siete por el hundimiento de la treinta y cinco con motivo de la sobrecarga al subsuelo y el empotramiento de columnas y trabes; que el perito tercero en discordia, Ingeniero Dorbecker, hace ^Asuplente el dictamen del perito del actor y agrega, aparte de lo relativo a propiedad y posesión, que en el ^Cmuro divisorio se encuentran todos los daños y desperfectos descritos en la inspección judicial practicada en la segunda instancia, que tales daños y desperfectos han sido causados por la invasión, empotramiento y apoyo de la obra nueva en el muro de la casa treinta y siete, y que sin la atagüa se aumentarían los daños al irse asentando la construcción; el ^EJuez Arbitro concede pleno valor probatorio a dichos dictámenes de acuerdo con los artículos 419 y 423 del Código de Procedimientos Civiles vigente porque ^Ela conformidad que revisten es sobre cuestiones técnicas, y además, concuerda lo dictaminado con lo que se demostró con las pruebas documental, testimonial y de inspección judicial. La propia sentencia continúa considerando, que en el informe del Departamento del Distrito Federal (Dirección de Servicios Urbanos y Obras Públicas) de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, el cual se pidió por el Juez Arbitro por acuerdo oportuno de la Sala y para mejor proveer, con motivo de la construcción de la casa treinta y cinco de la Avenida Uruguay, se manifiesta: que la licencia fué para construir una planta baja y cinco altos, que la casa consta de planta baja y seis altos, --

que según las apariencias la casa treinta y cinco invadió una pequeña parte del muro de la treinta y siete, - que al hacerse aquella no se construyó muro de arrimo - sino que utiliza el paramento oeste de la treinta y siete, sin constituir evidencia, que los desperfectos causados en la treinta y siete consisten en el asentamiento del muro colindante y se traducen en cuarteaduras -- importantes en todos los pisos y muros divisorios y que existen manchas de humedad antiguas en dicho muro; afirma la sentencia, que lo relativo a la causa de las cuarteaduras debe tomarse como una simple opinión por rebasar la órbita de las funciones de la Dirección, aunque concuerda con las otras pruebas rendidas sobre este punto; que en lo concerniente a la invasión del muro y a la falta del de arrimo, aunque de dicha órbita, sólo -- tiene valor, por su vaguedad, en conexión con las demás pruebas, y lo afirmado sobre ser el permiso de construcción para seis cuerpos, constar de siete, asentamiento del muro colindante, y existencia de desperfectos, también es de esa órbita y hace prueba plena conforme a -- los artículos 327, fracciones II y V, y 411 del mismo -- Código de Procedimientos Civiles ya citado; que la desobediencia voluntaria al Reglamento de Construcciones -- con el aumento de un piso al número de los permitidos -- envuelve la conciencia de una segura responsabilidad -- ante el Departamento del Distrito Federal, y de una probable ante terceros. En seguida la sentencia afirma, -- que aunque en los alegatos del actor en ambas instancias se habló de reparación de daños, el Juez Arbitro en la sentencia sólo puede ocuparse de la demolición de la --

- 11 -



obra nueva, porque es lo único pedido en definitiva en la demanda; que desde luego, procede reparar la invasión en el muro divisorio porque esta invasión es parte de la demolición pedida; que la fracción I del artículo -- 1195 del Código de Procedimientos Civiles habla de "obtener en su caso la demolición" y la ley toda no distingue casos, lo cual significa que puede haber algunos en que no sea necesaria la demolición completa y que la distinción queda al criterio judicial; que la parte final del artículo 11 transitorio del Código de Procedimientos Civiles de mil novecientos treinta y dos, ordena al árbitro fallar la apelación con las formalidades del juicio sumario, y una de estas formalidades - artículo 441- es la de precisar los efectos de la sentencia facultando al Juez para determinar desde la sola suspensión de la obra hasta su demolición completa y ordenándole determinar en todo caso la demolición de la parte invasora; en concepto del Juez Arbitro no es necesario ni justa la demolición total de la obra nueva y estima suficiente para la eficacia de la protección de los derechos del actor que se repare la invasión del muro divisorio y se construya otro paralelo, con ataguía, para que sobre él únicamente descansen los muros transversales de la casa número treinta y cinco de Uruguay; que este criterio se inspira en que está demostrado que la ataguía es hasta hoy el medio de mayor eficacia para la protección recíproca de las construcciones en el suelo de la Ciudad de México, en que carece de ella la obra nueva (además del peritaje de segunda instancia, lo --- prueba el de primera al resolver las preguntas XII, XIII

y XVII del cuestionario indirecto) y en consultas privadas; por último, que como la señora Dolores Boubée -- viuda de Macedo y el licenciado Miguel S. Macedo Jr., -- se apersonaron en el cuaderno principal del tomo exhibiendo un testimonio de escritura de partición y adjudicación de los bienes de la testamentaria demandada, y fundados en tal testimonio, pidieron se les tuviese como causahabientes de la sucesión, y así se les tuvo, y además, como la escritura es de fecha posterior a la de iniciación del interdicto y con sus cláusulas III y VI se demuestra que la casa número treinta y cinco de la Avenida Uruguay de esta Ciudad le fué adjudicada al Licenciado Miguel Macedo Jr., quien aceptó la adjudicación, dicho letrado es, en consecuencia, el propietario de la obra nueva, según los artículos 4º del Código de Procedimientos Civiles, y 2º transitorio y 1799 del Código Civil. Fundada en las consideraciones anteriores concluye la sentencia con los puntos resolutivos que quedaron transcritos en el primer resultando de este fallo.

TERCERO.- La parte quejosa invoca contra la sentencia reclamada diversos conceptos de violación, de los cuales aparecen tres que son de carácter procesal, y que por tanto deben enunciarse previamente: a) afirman los quejosos que en el procedimiento de segunda instancia la parte apelante (la demandada) solicitó la concesión de un término supletorio de prueba para que dentro de él pudiera practicarse la inspección judicial y la pericial que ofreció oportunamente; que a pesar de su oposición a la concesión de dicho término, en virtud



- 12 -

de su notoria improcedencia de acuerdo con el artículo 1145 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que en los interdictos todos los términos son fatales e improrrogables, y de que al abrirse el término ordinario en la segunda instancia se le habían concedido ya a la demandada cinco días improrrogables, la Tercera Sala, no obstante, concedió un término supletorio de prueba de cinco días para que dentro de él pudieran practicarse aquellas diligencias; que dentro de dicho término -- únicamente pudo practicarse la inspección judicial, pero no así la pericial, por lo que la misma parte apelante solicitó se prorrogara dicho término supletorio por cinco días más con el fin de rendir esta última prueba, a lo que accedió la Sala en acuerdo de veintidós de enero de mil novecientos treinta y dos; que contra esa determinación de prórroga protestó para los efectos del amparo reclamando la violación de las garantías individuales que esa resolución implica, pues infringe en su perjuicio el artículo 1145 del Código de Procedimientos Civiles según el cual todos los términos en los interdictos son fatales e improrrogables, y su infracción -- trae consigno la del artículo 14 constitucional;

b) también se reclama como violación de carácter procesal la prevención que con relación a la misma prueba pericial se hizo a la parte demandada por auto de primero de febrero de mil novecientos treinta y dos, cuando se señaló para la práctica de la prueba el día siguiente a las dieciseis horas, por la cual se conminó a ésta y a su perito, que de no asistir éste a la dili-

gencia respectiva, la practicaría en substitución suya y en su rebeldía el señor Manuel González Rul, prevención que en concepto de la parte quejosa es atentatoria de sus derechos porque la Sala carecía de fundamento legal para hacer la substitución con que fué conminada, e infringió los artículos 475 y 476 del Código de Procedimientos Civiles, porque de no haber concurrido el Ingeniero Alcérreca, perito que designó, tenía por lo menos tres días para substituirlo, y tal procedimiento resulta violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal, razón por la cual formuló su protesta para los efectos del amparo; el mismo escrito por el que reclama la violación constitucional contra la determinación antes mencionada, contiene también la que se endereza contra la determinación del Magistrado Semanero que negó al perito designado por la demandada el plazo necesario que le fué solicitado para emitir su juicio, acordando que si éste no rendía su dictamen antes de las quince horas del día siguiente, lo produciría en substitución suya el Arquitecto Manuel González Rul, pues dice la quejosa, que la negativa y el mandato relacionados son violatorios en perjuicio de la demandada de los artículos 469, 476 y 482 del Código Procesal ya citado, porque -- habiendo designado perito, a éste es a quien correspondía practicar la diligencia y el único que podía rendir su dictamen por la parte demandada, sin que pudiera substituirlo el Tribunal, debiendo concedérsele el tiempo necesario para formular y emitir su dictamen, y siendo tales determinaciones infractoras de las disposiciones procesales ya citadas, resultan violatorias del artículo

- 13 -



lo 14 de la Carta Magna;

c) igualmente reclama como concepto de violación procesal la recepción de la prueba testimonial de segunda instancia, porque tanto ésta como la documental consistente en el acta levantada el veintinueve de octubre de mil novecientos treinta, fueron objetadas en lo que se refiere a su recepción, porque tanto dicha acta, que es única y exclusivamente una prueba testimonial, (las personas que la suscriben atestiguan sobre los hechos que contiene), como el interrogatorio respectivo, versan sobre hechos que habían sido ya objeto de la testimonial de primera instancia, y su admisión es violatoria en perjuicio de la quejosa del artículo 578 del Código de Procedimientos Civiles, razón por la que se formuló la protesta respectiva reclamándose la reparación constitucional por ser la admisión de la prueba violatoria del artículo 14 de la Constitución Federal.

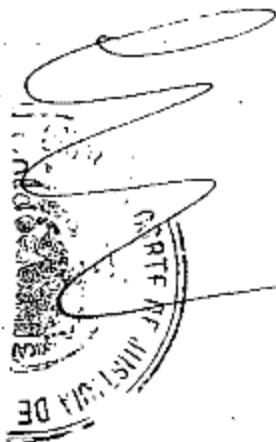
SE
CUARTO.- Como violación de fondo reclaman la del artículo 604 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, que dispone que cuando el actor no probare su acción será absuelto el demandado, violación que relaciona con la infracción de los artículos 1195 fracción I, 1134, 1138 y 1141 del mismo Código Procesal, y la hace consistir en que la parte actora no comprobó ni la posesión de la casa número treinta y siete de la Avenida Uruguay, ni los daños que se dicen causados en ella por la construcción de la casa número treinta y cinco de la misma Avenida, razón por la que, en su concepto, el Juez Arbitro debió absolver a la parte demandada. En efecto, dice el quejoso, que la posesión intentó acreditarse con la escri-

tura de primero de diciembre de mil ochocientos noventa y nueve por la que el causante de la sucesión demandada, doctor Guillermo Parra, reconoció a doña Isabel Vivanco de Ludert, causante de don Federico Ludert, la propiedad del muro que divide las casas treinta y cinco y --- treinta y siete; con la escritura de partición de veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta en la que se adjudicó a la actora la casa treinta y siete en la testamentaria de su difunta esposa señora Vivanco de Ludert; con el escrito dirigido al Director General del Catastro por don Federico Ludert y el difunto licenciado don Miguel S. Macedo, el siete de diciembre de mil novecientos nueve; y con el certificado del acta catastral número seiscientos diez de diez de diciembre de --- mil novecientos nueve; que el Juez sentenciador deriva la posesión de la propiedad, fundándose en los artículos 790 y 830 del Código Civil actual, sin tener en consideración que ninguno de tales documentos acreditan la posesión en el momento de entablar el interdicto porque la posesión no está ligada a la propiedad conforme a los artículos 729 y 822 del Código Civil de mil ochocientos ochenta y cuatro, independientemente de que, conforme al artículo 1138 del Código de Procedimientos Civiles, en el interdicto de obra nueva no es admisible ninguna prueba sobre la propiedad, por lo que al tener el Arbitro por acreditado el elemento posesión y no a título precario en favor del señor Ludert, con tales documentos, infringe la fracción I del artículo 1195 del Código de Procedimientos Civiles y viola por tanto el artículo 14 de la Constitución Federal; que la valora--

- 14 -



ción que el Juez Arbitro concede a la prueba testimonial previa, que sirvió para despachar la suspensión provisional de la obra, como elemento para acreditar la posesión, también es violatoria de los artículos 562, --- 563 y 568 del Código de Procedimientos Civiles, porque a uno de los testigos; Ingeniero Llanche **A** no se le interrogó acerca de los particulares a que se refieren -- las fracciones II, III y IV del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles, **C** se rindió sin citación contraria en contravención a los artículos 373 y 507 del mismo Cuerpo de Leyes **N** con el solo objeto de preparar la acción para el efecto de suspender la construcción de la obra; que **E** además se rindió fuera de término, violándose el artículo 365 y no se dió copia del interrogatorio a la demandada como lo exige el artículo 507; -- y aun cuando conforme al artículo 552 el valor de la -- prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, el 563 -- **E** exige en su fracción VII que se cumpla escrupulosamente con lo dispuesto por el artículo 527, y el artículo 568 previene que no tendrán valor legal las pruebas rendidas con infracción a lo dispuesto en los diez primeros capítulos del título V, del Libro Primero del Código, y en estas condiciones estima que al calificar la prueba no debió el Juez Arbitro concederle valor legal, y al -- concederle valor probatorio para acreditar el elemento posesión infringe tales disposiciones legales que no -- tuvo en cuenta, y por tanto los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; que en cuanto a la testimonial -- rendida dentro de la dilación probatoria de primera instancia de los señores Alberto Amador y Alberto Batiz -



también carece de valor legal por no haber sido interrogados los testigos sobre los particulares a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 527 del Código Procesal ya invocado, y por tanto, al concederle el Juez Arbitro valor probatorio a dicha testimonial -- infringe el artículo 568 de acuerdo con el cual no tendrán ningún valor legal las pruebas rendidas con infracción de los diez primeros capítulos del título V del -- Libro Primero del Código de Procedimientos Civiles; que al conceder valor probatorio a dicha prueba testimonial se infringen igualmente los artículos 529 y 568 del referido Código, al tomarse en cuenta las contestaciones de los testigos sobre los hechos a que se contraen las preguntas VII, VIII, IX y XV del interrogatorio, que se refieren a la posesión, pues tales hechos habían sido materia ya de otro interrogatorio en la misma instancia, o sea de la pregunta III y contestación relativa del de once de septiembre de mil novecientos treinta; que en cuanto a la testimonial del licenciado Fernando Noriega, abogado del señor Ludert, lo que aparece comprobado en el acta de la diligencia, carece de valor probatorio de acuerdo con el artículo 563, fracción I, pues se trata de un testigo inhábil, según la fracción XII del artículo 504, y aun cuando el sentenciador no se -- apoya en esta prueba para tener por acreditada la posesión del muro divisorio, advierte que la pregunta V del interrogatorio se refiere a hechos que ya habían sido materia de otros en la misma instancia; que la testimonial de segunda instancia también carece de valor legal



- 15 -

porque se rindió con infracción de los artículos 529 y 678 del Código Procesal, en lo que se refiere a la posesión del muro divisorio de las casas treinta y cinco y treinta y siete, por haber sido las preguntas tendientes a acreditar esa posesión, materia de otros interrogatorios en primera instancia, y por consiguiente, al calificarla el árbitro debió negarle valor probatorio conforme al artículo 568, y al no hacerlo violó dichos preceptos legales con infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; que tampoco pudo fundarse el Árbitro para tener por comprobada la posesión en el enlace que resulta de todas esas testimoniales, porque si ninguna de esas pruebas puede producir pleno valor probatorio, tampoco todas ellas juntas pueden producir ese efecto, por haberse recibido con infracción del mencionado artículo 568; que al calificarse la prueba testimonial de segunda instancia el Juez Arbitro aplica con efectos retroactivos el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles vigente, apoyándose en el artículo 3/o. transitorio del mismo Código, sin tener en cuenta que la ley aplicable no es dicho Código Procesal sino el de ochenta y cuatro, ya que el artículo 3/o. transitorio ya citado sólo se refiere a la tramitación de las apelaciones pendientes al entrar en vigor la ley, y no a las disposiciones que rigen el valor de la prueba; que después de convenir la sentencia, en que algunos de los hechos materia del interrogatorio de segunda instancia han sido objeto de otros interrogatorios, afirma que eso no trae consigo la nulidad de la prueba, sino solo es causa de responsabilidad de acuerdo con el artículo 376, sin tener en cuenta el artículo

568 en relación con los artículos 678 y 529, por lo ---
cual hace una inexacta interpretación del citado artícu-
lo 376 ya que no se trata de la negación de una prueba
sino de la admisión de una prohibida por la ley; que -
por los anteriores capítulos se infringen los artículos
14 y 16 de la Constitución Federal y se da efectos re-
troactivos al artículo 419 del Código Procesal actual en
perjuicio de la quejosa, pues tiene derecho a que la --
testimonia! se estime conforme al Código de Procedimien-
tos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro.

QUINTO.- En cuanto a los daños que el señor -
Ludert afirma se han causado a la pared divisoria de --
las casas números treinta y cinco y treinta y siete y -
en los muros perpendiculares de la segunda por defectos
de los cimientos de la casa número treinta y cinco, por
el empotramiento de pilares que sostienen esta última -
casa en parte de la pared divisoria al destacar el pri-
mer piso, y en los superiores por invasión del dominio
que le corresponde de la superficie comprendida entre -
el muro de la casa de su propiedad y las paredes de la
obra nueva, por el humedecimiento del muro que ha pro-
ducido desprendimientos de los aplanados en varios lu-
gares y filtraciones de agua en otros, y por el peso de
la construcción de la obra nueva se han ocasionado des-
niveles en las puertas de comunicación y cuarteaduras -
tanto en el muro divisorio como en los transversales, -
refiere el quejoso que estos daños son materia de prue-
ba pericial, y al particular expresa: que la pericial -
de primera instancia carece de valor probatorio por ha-
berse rendido los dictámenes correspondientes fuera del
término legal; que siendo así, la prueba es nula y el -

- 16 -



árbitro al calificarla debió desestimarla; que en cuanto a la pericial rendida en segunda instancia también -- carece de valor probatorio por haberse rendido en la -- prórroga del término supletorio de prueba, prórroga a -- todas luces improcedente por lo cual protestó para los efectos del amparo en cuanto a su ~~conceder~~, y encontrándose pues rendida fuera de un término legal, dicha prueba está sancionada de nulidad, razón por la cual el --- Juez Arbitro no pudo tomarla en consideración, y al hacerlo infringió los artículos 365, 1206, 677 y 1145 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos --- ochenta y cuatro, y consiguientemente el artículo 14 de la Constitución Federal; que la sentencia reclamada vio la el mismo precepto constitucional al conceder valor -- probatorio a dicha pericial, sin tener en cuenta que se recibió con infracción de los artículos 479 y 475 del -- Código Procesal ya citado al prevenirse a la demandada de no concurrir su perito a la diligencia ésta se -- practicaría con intervención de otro, y porque no se -- concedió a su perito el término necesario para rendir -- su dictamen conforme al artículo 471, razones estas por las que la prueba se recibió con infracción del artículo 568 del citado Código Procesal; que esta misma prueba la califica el Juez Arbitro con apoyo en el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles vigente, y a -- ese particular hace valer las mismas consideraciones -- que sobre la aplicación de dicho precepto legal expuso anteriormente al referirse a la prueba testimonial.

SEXTO.- Que la misma sentencia infringe el -- artículo 551 del Código de Procedimientos Civiles de -- mil ochocientos ochenta y cuatro al conceder pleno va--

lor probatorio al informe del Departamento del Distrito Federal de fecha diecisiete de noviembre, en lo relativo a que la licencia se concedió para construir una --- planta baja y seis altos, sin tener en cuenta las licencias mil y tres mil seiscientos setenta y cinco con las que se acreditó que la demandada obtuvo en un principio licencia para construir una planta baja y cinco pisos - altos, y posteriormente para construir un sexto piso.

SEPTIMO.- También reclama el hecho de que la sentencia da por probada la posesión del muro divisorio con elementos tomados de los dictámenes periciales, y los daños, con las diversas pruebas testimoniales rendidas, sin tener en cuenta que la posesión es un hecho que no puede probarse con dictámenes periciales, porque no tiene ninguna relación con alguna ciencia o arte que es el único caso en que el juicio de peritos puede tener lugar de acuerdo con el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles, razón por la cual al dar por -- probada la posesión con prueba pericial se opera la infracción del artículo 568 por ser nula dicha prueba --- en la parte relativa; que lo mismo debe decirse en lo - que se refiere a los daños que se dicen causados a la - casa número treinta y siete por cuanto a que se afirma que estos fueron originados por la obra nueva, pues siendo esta cuestión propia de un dictamen de peritos, no - pudo ni debió tomarse en cuenta la testimonial rendida a este particular, y también por este capítulo viola -- el artículo 568 ya citado, con infracción de los artículos 14 y 16 Constitucionales; que por lo que hace a la prueba de presunciones, tampoco pudo el Juez Arbitro --



- 17 -

dar por probada la posesión y los daños, porque tal presunción no puede derivarse de pruebas que carecen de -- algún valor legal, y por tanto infringe los artículos -- 538, 543, 544 y 545, y el 567 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro. Y afirma la parte quejosa que no habiendo probado el actor -- los elementos de su acción, el sentenciador debió absolver a la demandada, y al no hacerlo, violó tanto el artículo 354 como el 604 del Código Procesal ya citado, -- y los artículos 14 y 16 constitucionales.

OCTAVO.- Por último, invoca como concepto de violación la infracción del artículo 1195, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, y del 441 del Código Procesal vigente, porque en el supuesto de que la actora hubiera probado los elementos de su acción, la sentencia sólo pudo condenar a la demolición de la obra nueva, en la parte que perjudicara a la casa treinta y siete de la Avenida Uruguay, pero no condenar, como lo hizo, a construir -- desde sus cimientos y con ataguía, un muro paralelo con el objeto de que sobre él se apoyen los muros transversales de la casa número treinta y cinco, ya que para -- ello carece de fundamento legal y se excede de lo pedido por la actora en su demanda inicial, y por tanto se ocupa de una acción no deducida; que para ello se rige por el artículo 441 del Código Procesal vigente, que no es aplicable ni siquiera conforme al 11 transitorio del mismo Cuerpo de Leyes que sólo se contrae a formalidades, a tramitación y a requisitos de forma, pero no al fondo de la sentencia, que debió sujetarse a los térmi-

nos del artículo 1195, fracción I del Código Procesal anterior; y porque aún siendo aplicable el citado precepto procesal, se infringe, porque éste exige que la demolición se realice previa fianza de la actora, y este requisito no lo observa la sentencia. Este capítulo de infracciones también produce en sentir de la parte quejosa la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

NOVENTO.- La parte quejosa reclama tres capítulos de violación procesal realizadas en la segunda instancia, pero como la sentencia recurrida examina en primer término las pruebas aportadas a la primera instancia, y con ellas estima suficientemente probada la acción de interdicto de obra nueva, y las de la segunda instancia, en su mayoría, más bien las considera como confirmatorias de las de primera, claro es, que si efectivamente resultara que con tales elementos de convicción (los de primera instancia) se hubiese probado la acción, carecería indudablemente de finalidad práctica y jurídica el examen de los capítulos de violación procesal que se reclaman, puesto que, en el caso de resultar fundados, los efectos de la concesión del amparo sólo podrían ser el de que se dictara nueva sentencia sin tomar en cuenta las pruebas de segunda instancia viciadas con los procedimientos que se impugnan, lo cual es evidente que resultaría contrario al principio de economía en el procedimiento que ha normado la conducta de esta Sala en casos semejantes, pues resultaría que aún sin tomar en cuenta las pruebas relativas de segunda instancia, la sentencia se sostendría con sólo los elementos



que se aportaron a la primera instancia del juicio. En estas condiciones, procede reservar el examen de tales capítulos de violación procesal para sólo el caso de -- que fueran fundadas las violaciones que se invocan con relación a la valoración que se hace de las pruebas de primera instancia, y que, por tal motivo resultara ---- preciso examinar las infracciones que respecto a la valoración de las de segunda instancia se invocan; ya que de no prosperar los agravios invocados en lo que se refiere a la valoración de las pruebas de la primera instancia posiblemente se negaría a la conclusión de que aún sin tener en cuenta las de la segunda, se habría comprobado la acción interdiccial intentada.

La mayoría de los conceptos de violación se reducen a ~~impugnar~~ la eficacia de las pruebas que sirven de apoyo al Juez Arbitro para estimar probada la acción interdiccial; tienden a desvirtuar el valor probatorio de esos elementos de convicción, de unos, porque se infringen las reglas de la prueba, y de otros, porque no acreditan los elementos de la acción.

De acuerdo con las disposiciones de los artículos 1140 y 1195, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, -- bajo cuya vigencia se intentó el interdicto, los elementos de la acción del interdicto de obra nueva son: I.-- que el actor sea poseedor jurídico del inmueble afectado; II.-- que el demandado esté construyendo una obra nueva o que no haya transcurrido un año desde que se terminó la construcción; III.-- que la obra nueva perjudique la propiedad del actor.

Como primer capítulo de violación se invoca --

la infracción del artículo 1138 del Código de Procedi-
mientos Civiles, porque la sentencia admite que se com-
probó la posesión del inmueble afectado con diversos --
documentos que se refieren a la propiedad del mismo, no
obstante que la posesión no está ligada a la propiedad
y de que en el interdicto de obra nueva no se admiten -
pruebas sobre la propiedad, por lo que al tener el Ar-
bitro por acreditado el elemento posesión, y no a títu-
lo precario, con tales documentos, infringe también la
fracción I del artículo 1195 y el 604 del Código de Pro-
cedimientos Civiles ya invocado. Tales documentos con-
sisten según la sentencia en el testimonio de escritura
pública de fecha primero de diciembre de mil ochocientos
noventa y nueve, otorgada ante el Notario José Ráz Guz-
mán, en la que el Doctor Guillermo Parra dueño entonces
de la hoy casa número treinta y cinco de la Avenida Uru-
guay, reconoció en favor de la señora Isabel Vivanco de
Ludert, dueña entonces de la hoy casa número treinta y
siete de la misma Avenida, el dominio exclusivo del mu-
ro limítrofe, se obliga aquél a recortar el excedente
de una cornisa de la primera casa para dejar percepti-
ble e indiscutible el dominio de la segunda y permitió
la señora Ludert al Doctor Parra levantar sobre dicho -
muro una pared reservándose la propiedad del mismo; en
la certificación del acta número seiscientos diez, de -
diez de diciembre de mil novecientos nueve, levantada -
en la Oficina del Catastro, en la que se hace constar -
que en la diligencia respectiva y con motivo del inciden-
te suscitado por la colindancia entre la casa de la se-
ñora Ludert y la casa del señor Miguel S. Macedo, el --



- 19 -

señor Ludert presentó un escrito firmado por él y por -
 el licenciado Macedo, en el cual conviene este último -
 en que el muro que constituye la colindancia pertenece
 a la casa de la señora Ludert; en la copia fotostática
 del relacionado escrito; y en el testimonio de escritu-
 ra de adjudicación de bienes de la señora Ludert de fe-
 cha veintisiete de septiembre de mil novecientos trein-
 ta, en que consta la adjudicación al señor Ludert de la
 casa número treinta y siete de la Avenida Uruguay en la
 sucesión de su esposa.- Indiscutiblemente que estos do-
 cumentos sí acreditan por sí solos, y en su conjunto --
 producen una vehemente presunción, de que el señor Lu-
 dert tiene la posesión jurídica del inmueble afectado, -
 posesión que es a la que se refiere la legislación de -
 mil ochocientos ochenta y cuatro, porque según ella es
 posesión en derecho el que posee a título de propieta-
 rio, y aun cuando la posesión no está ligada indefecti-
 vamente con la propiedad, la calidad de propietario ha-
 ce presumir la posesión, y así debe aceptarse en tanto
 tal presunción no se desvirtúa; ciertamente que el ar-
 tículo 1138 del Código de Procedimientos Civiles esta-
 blece que en ningún interdicto se admitirán pruebas so-
 bre la propiedad, pero esta disposición no se ha infringi-
 do, porque las pruebas documentales antes mencionadas
 no se rindieron con el fin de acreditar, o mejor dicho
 juzgar sobre la propiedad, ni con ellas se decide sobre
 ésta, que es la limitación que establece el precepto, -
 pues precisamente tales documentos se aportaron para --
 comprobar la posesión a título de propietario, que es -
 lo que requiere la ley al emplear en el artículo 1195
 el término "perjuicio en sus propiedades", y al estable

cer que no puede usar el interdicto de obra nueva el que posee la cosa con título precario, pero sin que la sentencia haya juzgado sobre la validez del título que ampara esa propiedad; y como con tales documentos se acredita presuncionalmente la posesión, y esto es más que suficiente dada la naturaleza sumaria y provisional de los interdictos, indiscutiblemente con ellos quedó acreditado el primer elemento de la acción, o sea la posesión del inmueble que se dice afectado, y el concepto de agravio relativo que se hace valer por cuanto a que la sentencia admitió aquellos documentos como elementos probatorios de la acción resulta infundado.

Se invocan diversas infracciones de ley por lo que ve al valor probatorio que el Juez Arbitro concede a los testimonios de las personas que depusieron en la primera instancia como elemento para acreditar la posesión. La simple lectura de las declaraciones demuestra que efectivamente dichos testimonios carecen de valor probatorio conforme al artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles, puesto que ni el Ingeniero Mancebo, en la testimonial previa, ni los señores Amador y Batiz, que depusieron en la dilación probatoria de primera instancia, fueron interrogados sobre los particulares que imperativamente ordenan las fracciones II a IV del artículo 527 del Código Procesal citado, requisito indispensable para valorar las declaraciones de los testigos conforme al artículo 563 y 568 del citado Ordenamiento, cuya inobservancia resulta sancionada por este último precepto procesal con la ineficacia legal de la prueba; y teniendo en consideración el sistema rigorista del citado Código, es indudable que por --



- 20 -

ese solo capítulo la testimonial previa y la recibida - durante la dilación probatoria de primera instancia, ca- rece de valor legal y el concepto de violación que a - ese respecto se hace valer, es fundado; pero resulta -- ineficaz para conceder la protección federal porque el elemento posesión queda no obstante acreditado con la - documental de que antes se habló, y por tanto la senten- cia se sostiene en lo que se refiere a haberse accredi- - tado la posesión con los otros elementos de prueba.

DECIMO.- En lo que se refiere a que la obra - nueva ocasione a la casa número treinta y siete de la - Avenida Uruguay los perjuicios que precisa el actor, -- que es otro de los elementos de la acción interdiccial intentada, dice la parte quejosa que estos perjuicios - fueron materia de prueba pericial, y la sentencia recla- - mase se apoya entre otros elementos de convicción, -- en esta prueba para estimarlos comprobados; y según la - quejosa la pericial rendida en la primera instancia ca- - rece de valor probatorio por haberse producido los dic- - támenes correspondientes, fuera del término legal, y -- siendo así la prueba es nula y la sentencia debió deses- - timarla. El agravio es inconducente, porque aun cuando es verdad que el artículo 365 del Código de Procedimien- - tos Civiles, dispone que las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio, bajo pena de nulidad y responsabilidad del Juez, el artículo 485 del mismo Cuerpo Procesal autoriza al Juez en los - casos que lo estime necesario, para conceder a los pe- - ritos el tiempo que necesiten a fin de que formen y emi- - tan su juicio, y como en la especie, el Juez de Primera Instancia concedió a los peritos de las partes un térmi- - no de siete días para rendir su dictamen, término den--

tro del cual lo produjeron, y el tercero en discordia --
lo hizo cuando apareció ésta y por orden expresa del --
Juez, para quien nunca concluye el término de prueba, --
claro es, que dicha pericial no resulta viciada de nu--
lidad porque se ofreció en tiempo y se rindió dentro del
término que el Juez señaló a los peritos dentro de las
facultades que la ley le concede, y por tanto al tomar
la sentencia en cuenta dicha prueba no infringe el rela--
cionado artículo 365, porque en lo que se refiere a la
pericial la ley establece la excepción en su artículo --
485, el cual se observó por el Juez, y en estas condicio--
nes el agravio resulta infundado.

UNDECIMO.- No es procedente el concepto de --
violación a que se hace referencia en el considerando --
séptimo de este fallo, que se hace consistir: en que la
sentencia da por probada la posesión con prueba pericial
con infracción del artículo 568 del Código de Procedi--
mientos Civiles, pues que la posesión no tiene relación
con alguna ciencia o arte; en que dá por probados los --
daños que se dicen causados a la casa número treinta y
siete, por cuanto a que éstos fueron originados por la
obra nueva, con la testimonial, porque este hecho por --
su propia naturaleza es materia de prueba pericial; ---
y por último, en que tampoco pudo la sentencia admitir
como presuncional el conjunto de pruebas aportadas ya --
que cada una de ellas carece de valor legal. El agravio
resulta inepto porque independientemente de la eficacia
o ineficacia de esos argumentos, es de advertirse, que
aun cuando para estimar probada la posesión la senten--
cia hace referencia a la prueba pericial, y para los --



desperfectos a la testimonial, sin embargo, como la posesión de la casa y muro afectados quedó comprobada con la sola documental ya citada, y los daños e invasión -- del muro con la pericial y la inspección judicial, con los que también se demostró que los desperfectos eran -- recientes y que se produjeron durante la construcción -- de la obra nueva, claro es que la sentencia reclamada se sostiene aún sin tomar en cuenta la testimonial, y -- la pericial en lo que se refiere a la posesión del muro divisorio, y por tanto el agravio resulta inconducente.

Siendo suficientes los elementos de prueba ya enunciados para acreditar la acción interdiccial intentada, resulta innecesario en consecuencia el examen de los conceptos de violación que versan sobre la valoración de las pruebas de segunda instancia, y sobre las infracciones procesales que se atribuyen a la Tercera -- Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la segunda instancia, porque aún resultando -- procedentes esos conceptos, no podrían tener la eficacia de que por ellos se concediera el amparo, ya que -- aquellas pruebas, (las de segunda instancia), no serían indispensables para tener por acreditada la acción intentada, y en cuanto a las violaciones procesales, en el caso de ser declaradas procedentes, sólo producirían como resultado la ineficacia de algunas de aquellas pruebas, que en definitiva resultarían innecesarias para -- tener por acreditada la acción, pues la sentencia se -- sostendría con sólo las pruebas de la primera instancia, exceptuando la testimonial.

DUODECIMO.- En cambio, sí es de importancia el

examen del último concepto de violación que se invoca, relativo a la infracción de los artículos 1195 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, y 441 del Código Procesal vigente, porque, afirma la parte quejosa, la sentencia sólo pudo condenar a la demolición de la obra nueva, en la parte que perjudicara a la casa treinta y siete de la Avenida Uruguay, pero no condenar, como lo hizo, a construir -- desde sus cimientos y con ataguía, un muro paralelo con el objeto de que sobre él se apoyen los muros transversales de la casa número treinta y cinco, ya que para -- ello carece de fundamento legal y se excede de lo pedido por la actora en su demanda inicial, ocupándose así de una acción no deducida. Según los artículos 1195 fracción I, y 1201 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, el interdicto de obra nueva tiene por objeto impedir la continuación de la obra, y obtener en su caso la demolición, y la restitución de las cosas al estado que antes tenían. La -- sentencia estima, que se han ocasionado los perjuicios y procede desde luego reparar la invasión realizada en el muro divisorio porque esta invasión es parte de la -- demolición pedida, sin que sea necesaria ni justa la -- demolición total de la obra nueva, pues es suficiente -- para la eficacia de la protección de los derechos del -- actor, que se repare la invasión del muro divisorio y -- se construya otro paralelo, con ataguía, para que sobre él únicamente descansen los muros transversales de la -- casa número treinta y cinco de Uruguay, juicio que se -- inspira en que está demostrado que la ataguía es hasta



- 22 -

hoy el medio de mayor eficacia para la protección recí-
 proca de las construcciones en el suelo de la Ciudad de
 México, en que carece de ella la obra nueva, y en con-
 sultas privadas. Ahora bien, la consideración anterior
 ostensiblemente demuestra que el sentenciador al conde-
 nar a la construcción de un muro paralelo al divisorio,
 con atagüa, se inspiró en un espíritu de justicia y --
 equidad, precisamente con el fin de no condenar a la --
 demolición de toda la obra como hubiere sido proceden-
 te, por estimarlo innecesario, ya que con esa simple --
 medida se obtendría la eficaz protección de los derechos
 del actor; se ve pues, que dicha condena es substituti-
 va a la demolición de toda la obra a la que se vería --
 impelido a condenar el sentenciador por haberse acredi-
 tado que la obra nueva ha producido y puede seguir pro-
 duciendo perjuicios a la casa número treinta y siete --
 de la Avenida Uruguay; de manera que, si el artículo --
 55 autoriza al Juez para decretar en su caso la demo-
 lición de la obra nueva, cuando ésta ocasiona, como en
 la especie, perjuicios en las propiedades del actor, --
 claro es, que como acertadamente expresa la sentencia, --
 puede haber algunos casos en que no sea necesaria la --
 demolición completa y que la distinción queda al crite-
 rio judicial, y en estas condiciones, es lógico y jurí-
 dico afirmar que si el sentenciador estimó que la demo-
 lición total de la obra puede evitarse mediante la adop-
 ción de ciertas medidas, como lo es la construcción des-
 de sus cimientos de un muro paralelo al divisorio, con
 atagüa, ya que en esa forma considera que se le ocasio-
 nan menores perjuicios al demandado, que con la demoli-



ción total de la obra nueva, forzoso es convenir en que la sentencia no ha infringido el precepto legal citado, pues el término "en su caso" deja al criterio del juzgador la procedencia de la demolición de todo o parte de la obra nueva, y es indudable que dentro del casuismo que informa nuestro derecho, habrán casos en que para no condenar a la demolición total, el sentenciador se vea en la necesidad de adoptar alguna medida que sea eficaz para que la obra nueva no continúe ocasionando los perjuicios, medida que puede ser en parte, como en la especie, modificativa de la construcción a lo cual está autorizado por el artículo 1195 ya citado al interpretar su contexto y particularmente la frase "en su caso" en los términos indicados. No era pues necesario que el sentenciador se fundara en el artículo 441 del Código Procesal vigente, porque el artículo 1195, fracción I, del de ochenta y cuatro, interpretativamente lo autoriza para la adopción de esa medida a fin de no tener que condenar a la demolición total de la obra, y por tanto el agravio que se hace valer en lo que se refiere a la inaplicación del citado artículo 441 es improcedente, ya que aun sin fundarse en él, la condena relativa tiene su apoyo legal en el referido artículo 1195.

No siendo aptos los conceptos de violación que se han examinado, y resultando además innecesario el examen de los otros que se invocan por encontrarse acreditada la acción con los elementos de prueba rendidos en la primera instancia, (exceptuando la testimonial), y con la inspección judicial de segunda instancia en lo



que se refiere a los voladizos exteriores de la casa -- número treinta y cinco, que dan a la treinta y siete de la Avenida Uruguay, la cual se practicó durante la dilación supletoria de prueba en la segunda instancia y -- que no ha sido impugnada, procede negar a los quejosos la protección federal.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones II y VIII de la Constitución General de la República, se resuelve:

PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA -- NI PROTEGE a don Miguel S. Macedo Jr., y Dolores Boubee viuda de Macedo, contra actos del Juez Arbitro, licenciado Roque Estrada, de la Tercera Sala del Tribunal -- Superior de Justicia del Distrito Federal y del Juez -- Octavo de lo Civil de esta Capital, que se hacen consistir en la sentencia pronunciada por la primera de dichas autoridades el veintidós de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, en grado de apelación, en los autos del interdicto de obra nueva intentado por don Federico Ludert contra la sucesión de don Miguel S. Macedo; y en la ejecución que de dicha sentencia se atribuye a las otras dos autoridades.

SEGUNDO.- Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a las autoridades responsables, y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cuatro votos de los -- Ministros Alfonso Pérez Gasga, Abenamar Eholi Paniagua, Luis Bazdresch y Presidente Francisco H. Ruiz, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

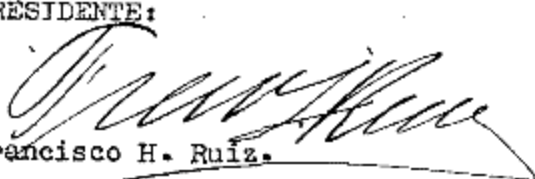
la Nación.

Cotejado con
el proyecto
aprobado por
el C. Minis-
tro Lic. Abe-
namar Eboli
Paniagua.

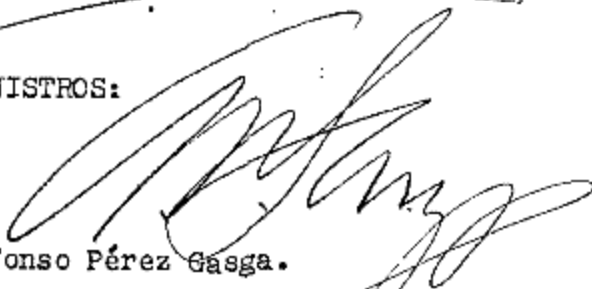
El Ministro Sabino M. Olea, no asistió a la -
discusión y votación de este asunto, por las razones --
que constan en el acta del día.

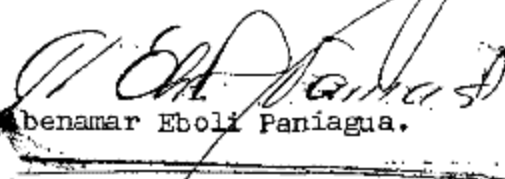
Firman los expresados CC. Presidente y Minis-
tros que integraron la Sala, con el Secretario que au-
toriza.

PRESIDENTE:


Francisco H. Ruiz.

MINISTROS:

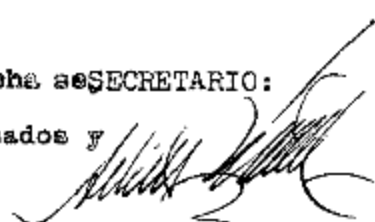

Alfonso Pérez Gasga.


Benamar Eboli Paniagua.


Luis Bazdresch.



En **AGO 21 1980** por lista de la misma fecha el SECRETARIO:
notificó la resolución anterior, a los interesados y
al Ministerio Público Federal.


Arturo Puente y F.